

CUADRAGÉSIMO QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023

En la Ciudad de Matehuala, Estado de San Luis Potosí, siendo las 14 horas con 50 minutos del día jueves 31 de agosto del año 2023 dos mil veintitrés, reunidos en las instalaciones del Salón de Cabildos Municipal, y contando con la presencia del **ING. IVÁN NOÉ ESTRADA GUZMÁN**, **Presidente Municipal de Matehuala, S.L.P.**, del **LIC. RAÚL ORTEGA RODRÍGUEZ**, **Secretario del H. Ayuntamiento y de Actas y Acuerdos de Cabildo**, más **14 catorce integrantes del H. Cabildo Municipal**; se dio inicio a la **CUADRAGÉSIMO QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CABILDO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024**, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. PASE DE LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL PARA LA INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA ANTERIOR.
3. APROBACIÓN DE DIVERSAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.
4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS, 46, 73, 99 Y 117, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ.
5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS, 53, 54, 57 en su fracción XII, 124 BIS en su fracción III los párrafos segundo y tercero, Y 135 en sus párrafos segundo y quinto, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ.
6. ASUNTOS GENERALES.
7. CLAUSURA.

1.- Punto uno del orden del día el Secretario del Ayuntamiento, **Lic. Raúl Ortega Rodríguez** realiza el **PASE DE LISTA** respectivo, haciéndose constar que están presentes:

PRESIDENTE MUNICIPAL ING. IVÁN NOÉ ESTRADA GUZMÁN; REGIDORA FRANCISCA DEL SAGRARIO ROJAS MENDOZA; SÍNDICO LIC. EDUARDO MARTÍNEZ JUÁREZ; SÍNDICO LIC. SELENE DANAÉ HERNÁNDEZ BOCANEGRA; REGIDOR FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA; REGIDORA MARIBEL CELAYA GUERRA; REGIDOR JORGE ARTURO SANDOVAL ZAPATA; REGIDORA MARÍA DEL CARMEN VÁZQUEZ SALINAS; REGIDOR JUAN RAMÓN SÁNCHEZ VELÁZQUEZ; REGIDORA MARIANA PUENTE ACEVEDO; REGIDOR ALEJANDRO MARTÍNEZ LUNA; REGIDORA ROSA VERÓNICA RIVERA TRISTÁN; REGIDOR JOSÉ MARIO HERNÁNDEZ GARCÍA; REGIDOR GERARDO ROJAS DÍAZ; y REGIDORA FLOR EUGENIA TORRES GUERRA.

Haciendo constar la asistencia de **15 quince integrantes del H. Cabildo Municipal**, por lo que estando presentes la **totalidad** de los miembros de este Honorable Cabildo, existe quórum legal por lo que el Presidente Municipal **Ing. Iván Noé Estrada Guzmán** procede con la instalación de la **Cuadragésimo quinta Sesión ordinaria** de Cabildo el día de hoy **jueves 31 de agosto del año 2023 dos mil veintitrés**, siendo las 14:50 horas.

2.- Punto dos del orden del día que señala APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA ANTERIOR, comenta el **Lic. Raúl Ortega Rodríguez** que con fundamento en el Art. 81 del Reglamento Interno del Ayuntamiento, se les hizo llegar en tiempo y forma el borrador del acta para su revisión, si tuvieran alguna observación o si no para someterla a votación, después se imprima y pasarla para su firma; Al no haber comentarios se somete a consideración del Colegiado la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria anterior, **APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE 15 QUINCE VOTOS A FAVOR, DE LOS 15 QUINCE MIEMBROS PRESENTES EN EL ACTO.**

3.- Punto tres del orden del día correspondiente a la APROBACIÓN DE DIVERSAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, el **Lic. Raúl Ortega Rodríguez** manifiesta que se encuentra presente la Ing. Amalia Estefanía Castillo Córdova y el Ing. Edgar de la Rosa Gámez, Directora y Subdirector de la Dirección de Obras Públicas, quien esté por la afirmativa del uso de la voz, favor de expresarlo levantando su mano **aprobándose por unanimidad de los miembros presentes**; toma la palabra la **Ing. Amalia** y dando inicio con su presentación, del primer punto son los expedientes del 1.1 al 1.16, que son trámites de subdivisión, comentando que trae la Minuta de Trabajo derivada de la Mesa Colegiada que se llevó a cabo el lunes 28 de agosto a las 12:30 horas aquí en el Salón de Cabildos, donde se

dictaminaron todos y cada uno de los puntos que se van a tratar a continuación por lo que si le permiten dará inicio con su exposición:

1.1- Es una solicitud que hace el **C. Daniel Martínez Cuello,**

comentando que las recomendaciones que hace la Mesa Colegiada a esta propuesta de subdivisión son las siguientes: Este proyecto cumple con especificaciones, por lo que esta Mesa Colegiada no tiene inconveniente en que se presente ante Cabildo;

1.2- Es una solicitud que hace el **C. Jorge Luis Oliva Medrano,**

comentando que las recomendaciones que hace la Mesa Colegiada a esta propuesta de subdivisión son las siguientes: Este proyecto queda pendiente para su autorización por factibilidad de agua potable;

1.3- Es una solicitud que hace la **C. María Carolina Ovalle Ríos,**

comentando que las recomendaciones que hace la Mesa Colegiada a esta propuesta de subdivisión son las siguientes: Este proyecto cumple con especificaciones, por lo que esta Mesa Colegiada no tiene inconveniente en que se presente ante Cabildo;

1.4- Es una solicitud que hace el **C. Juan Díaz Nieto,**

comentando que las recomendaciones que hace la Mesa Colegiada a esta propuesta de subdivisión son las siguientes: Este proyecto cumple con especificaciones, por lo que esta Mesa Colegiada no tiene inconveniente en que se presente ante Cabildo;

1.5- Es una solicitud que hacen los **CC. Juan Ignacio Quiroz Ramírez y María Isabel García Rodríguez,**

comentando que las recomendaciones que hace la Mesa Colegiada a esta propuesta de subdivisión son las siguientes: Este proyecto

queda pendiente para su autorización por factibilidad de agua potable y ancho de calle;

1.6- Es una solicitud que hacen los **CC. Juan Ignacio Quiroz Ramírez y María Isabel García Rodríguez,**

[REDACTED]

[REDACTED] comentando que las recomendaciones que hace la Mesa Colegiada a esta propuesta de subdivisión son las siguientes: Este proyecto queda pendiente para su autorización por factibilidad de agua potable y ancho de calle;

1.7- Es una solicitud que hacen los **CC. Wenceslado Cadena Rojas y José Dolores Cadena Rojas,**

[REDACTED]

[REDACTED] comentando que las recomendaciones que hace la Mesa Colegiada a esta propuesta de subdivisión son las siguientes: Este proyecto cumple con las especificaciones, por lo que esta Mesa Colegiada no tiene inconveniente en que se presente ante Cabildo;

1.8- Es una solicitud que hace el **C. Daniel Espinosa Nieto,**

[REDACTED]

[REDACTED] comentando que las recomendaciones que hace la Mesa Colegiada a esta propuesta de subdivisión son las siguientes: Este proyecto cumple con las especificaciones, por lo que esta Mesa Colegiada no tiene inconveniente en que se presente ante Cabildo;

1.9- Es una solicitud que hace el **C. Daniel Espinosa Nieto,**

[REDACTED]

[REDACTED] comentando que las recomendaciones que hace la Mesa Colegiada a esta propuesta de subdivisión son las siguientes: Este proyecto cumple con las especificaciones, por lo que esta Mesa Colegiada no tiene inconveniente en que se presente ante Cabildo;

1.10- Es una solicitud que hace el **C. Daniel Espinosa Nieto,**

[REDACTED]

[REDACTED] comentando que las

recomendaciones que hace la Mesa Colegiada a esta propuesta de subdivisión son las siguientes: Este proyecto cumple con las especificaciones, por lo que esta Mesa Colegiada no tiene inconveniente en que se presente ante Cabildo;

1.11- Es una solicitud que hace el C. Daniel Espinosa Nieto, [REDACTED]

[REDACTED] comentando que las recomendaciones que hace la Mesa Colegiada a esta propuesta de subdivisión son las siguientes: Este proyecto cumple con las especificaciones, por lo que esta Mesa Colegiada no tiene inconveniente en que se presente ante Cabildo;

1.12- Es una solicitud que hace el C. Daniel Espinosa Nieto, [REDACTED]

[REDACTED] comentando que las recomendaciones que hace la Mesa Colegiada a esta propuesta de subdivisión son las siguientes: Este proyecto cumple con las especificaciones, por lo que esta Mesa Colegiada no tiene inconveniente en que se presente ante Cabildo;

1.13- Es una solicitud que hace el C. Daniel Espinosa Nieto, [REDACTED]

[REDACTED] comentando que las recomendaciones que hace la Mesa Colegiada a esta propuesta de subdivisión son las siguientes: Este proyecto cumple con las especificaciones, por lo que esta Mesa Colegiada no tiene inconveniente en que se presente ante Cabildo;

1.14- Es una solicitud que hace el C. Daniel Espinosa Nieto, [REDACTED]

[REDACTED] comentando que las recomendaciones que hace la Mesa Colegiada a esta propuesta de subdivisión son las siguientes: Este proyecto cumple con las especificaciones, por lo que esta Mesa Colegiada no tiene inconveniente en que se presente ante Cabildo;

1.15- Es una solicitud que hace el C. Daniel Espinosa Nieto, [REDACTED]

[REDACTED] comentando que las recomendaciones que

hace la Mesa Colegiada a esta propuesta de subdivisión son las siguientes: Este proyecto cumple con las especificaciones, por lo que esta Mesa Colegiada no tiene inconveniente en que se presente ante Cabildo;

1.16- Es una solicitud que hace el **C. Daniel Espinosa Nieto,** [REDACTED]

[REDACTED] comentando que las recomendaciones que hace la Mesa Colegiada a esta propuesta de subdivisión son las siguientes: Este proyecto cumple con las especificaciones, por lo que esta Mesa Colegiada no tiene inconveniente en que se presente ante Cabildo;

2.1- Se presenta la solicitud que hace el **C. Roberto Zapata Cossío,** [REDACTED]

[REDACTED] comentando que las recomendaciones que hace la Mesa Colegiada a esta propuesta de subdivisión son las siguientes: este proyecto cumple con las especificaciones, por lo que esta Mesa Colegiada no tiene inconveniente en que se presente ante Cabildo;

2.2- Se presenta la solicitud que hace el **C. Regino Miguel Medellín Romero,**

[REDACTED] comentando que las recomendaciones que hace la Mesa Colegiada a esta propuesta de subdivisión son las siguientes: este proyecto cumple con las especificaciones, por lo que esta Mesa Colegiada no tiene inconveniente en que se presente ante Cabildo;

3.1.- Es una solicitud que hace el **C. Pedro Lara Coronado y C. Justina Lucio Muñoz,** [REDACTED]

[REDACTED] comentando que las recomendaciones que hace la Mesa Colegiada a esta propuesta de subdivisión son las siguientes: Este proyecto cumple con las especificaciones, por lo que esta Mesa Colegiada no tiene inconveniente en que se presente ante Cabildo

3.2.- Se presenta la solicitud que hace el **C. Ricardo Leos Quijano,** [REDACTED]

[REDACTED] comentando que las recomendaciones que hace la Mesa Colegiada a esta propuesta de subdivisión son las siguientes: este proyecto cumple con las especificaciones, por lo que esta Mesa Colegiada no tiene inconveniente en que se presente ante Cabildo;

3.3.- Es una solicitud que hace el **C. Alberto Sifuentes Corpus,** [REDACTED]

[REDACTED] comentando que las recomendaciones que hace la Mesa Colegiada a esta propuesta de subdivisión son las siguientes: Este proyecto cumple con las especificaciones, por lo que esta Mesa Colegiada no tiene inconveniente en que se presente ante Cabildo;

3.4.- Se presenta la solicitud que hace el **C. Alberto Sifuentes Corpus,** [REDACTED]

[REDACTED] comentando que las recomendaciones que hace la Mesa Colegiada a esta propuesta de subdivisión son las siguientes: este proyecto cumple con las especificaciones, por lo que esta Mesa Colegiada no tiene inconveniente en que se presente ante Cabildo;

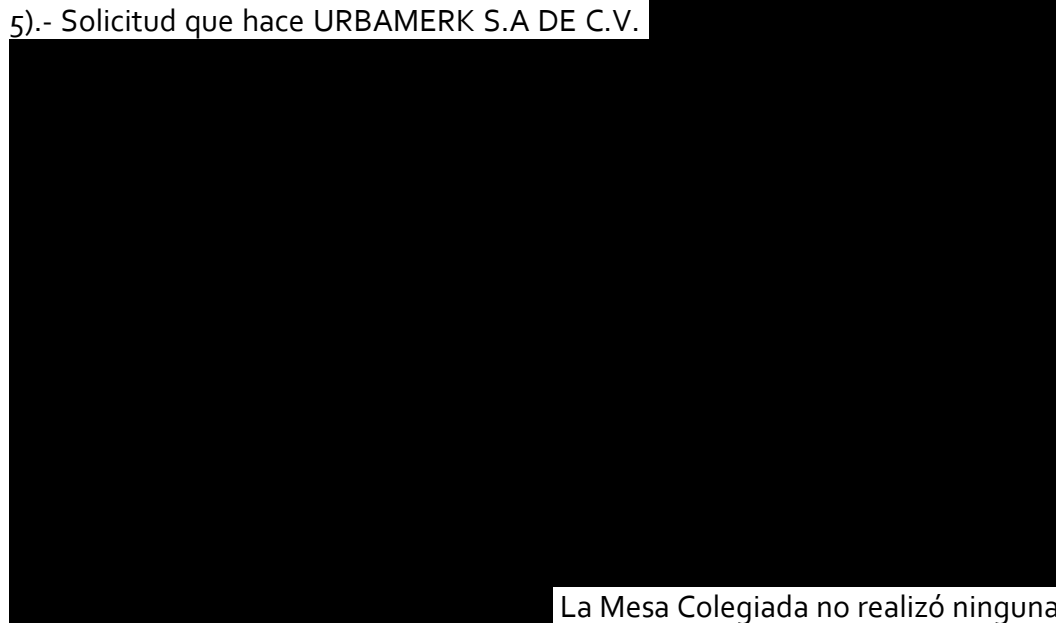
4.1.- Se presenta la solicitud que hace el **C. Juan José Castillo Medellín y Cond.,**

[REDACTED] comentando que las recomendaciones que hace la Mesa Colegiada a esta propuesta de subdivisión son las siguientes: este proyecto cumple con las especificaciones, por lo que esta Mesa Colegiada no tiene inconveniente en que se presente ante Cabildo;

4.2.- Es una solicitud que hace el **C. Juan José Castillo Medellín y Cond.,** [REDACTED]

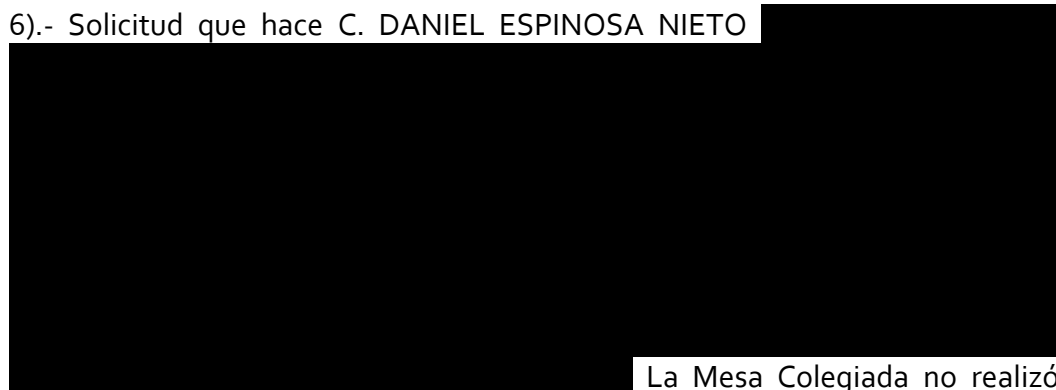
[REDACTED] comentando que las recomendaciones que hace la Mesa Colegiada a esta propuesta de subdivisión son las siguientes: Este proyecto cumple con las especificaciones, por lo que esta Mesa Colegiada no tiene inconveniente en que se presente ante Cabildo;

5).- Solicitud que hace URBAMERK S.A DE C.V.



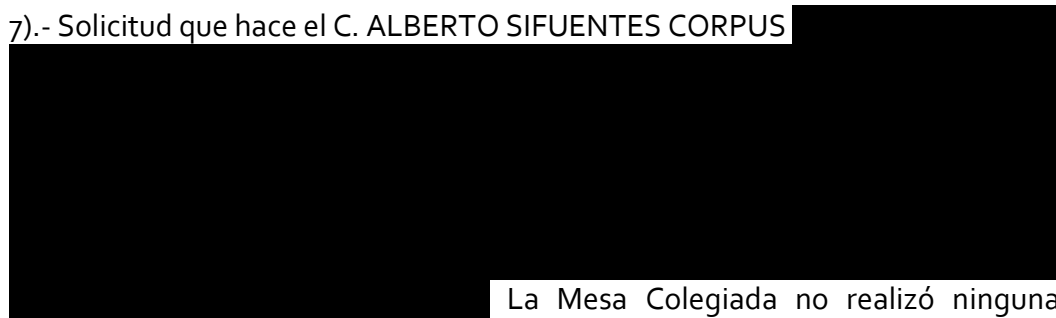
La Mesa Colegiada no realizó ninguna observación ni presentó inconveniente alguno en que se presente este expediente para su autorización;

6).- Solicitud que hace C. DANIEL ESPINOSA NIETO



La Mesa Colegiada no realizó ninguna observación ni presentó inconveniente alguno en que se presente este expediente para su autorización;

7).- Solicitud que hace el C. ALBERTO SIFUENTES CORPUS



La Mesa Colegiada no realizó ninguna

observación ni presentó inconveniente alguno en que se presente este expediente para su autorización;

8).- Solicitud que hace la C. BETSY SANDOVAL CORTES



La Mesa Colegiada no realizó ninguna observación ni presentó inconveniente alguno en que se presente este expediente para su autorización;

9).- Solicitud que hace el H. Ayuntamiento de Matehuala, S.L.P. para que se pueda aprobar por el H. Cabildo la Autorización para la Regularización de la tenencia de la tierra de diversos predios Propiedad Municipal a favor de los poseedores del "Fraccionamiento Matehuala" los cuales se describen a continuación:

NUMERO	NOMBRE	CALLE Y No. OFIC.	LOTE	MANZANA
1	FRANCISCA ARACELI ORTEGA RETA		■	■
2	LIUS ARMANDO PECINA CASTILLEJA		■	■
3	JOSÉ GUADALUPE CRUZ TRISTAN		■	■
4	MIGUEL ÁNGEL GRIMALDO MENDOZA		■	■

La Mesa Colegiada no realizó ninguna observación ni presentó inconveniente alguno en que se presente este expediente para su autorización;

Concluyendo así los puntos a presentar.

Toma la palabra la **Regidora María del Carmen Vázquez Salinas** para preguntar cuál es el procedimiento o por qué tenemos que regularizar, porque a través del Municipio, la **Ing. Amalia** le responde que porque el Fraccionamiento Matehuala es Municipal, fueron pies de casa, sigue siendo propiedad del Municipio entonces una vez que se les entregó a las familias la vivienda si no han escriturado sigue siendo parte del Municipio, entonces a través de Cabildo ustedes autorizan que el Municipio se deshaga de esa propiedad de tierra y vaya a formar parte del terreno, es como una donación; el **Regidor Alejandro Martínez Luna** pregunta por los expedientes de subdivisión del 1.8 al 1.14, la **Ing. Amalia** le refiere que son en San Rafael y de hecho esta es una lotificación que se nos presentó desde inicios de la Administración, si me permiten les daré la explicación, en la Administración anterior pasó exactamente lo mismo que tenemos con los otros casos, se autorizó en porciones y en área de calles, entonces los propietarios actuales tienen las porciones ya divididas o sea que hicieron la protocolización

entonces ya tienen las porciones por cada una de las manzanas, vendieron los lotes y desde que inició la Administración están intentando regularizar, lo que hicimos con ello fue lo siguiente, lo primero obtener las factibilidades o sea que SAPSAM les normara qué es lo que se tenía que hacer para que los lotes tengan el servicio, lo segundo es el área de donación que la dejaron en la manzana 13 ahí viene la descripción y lo tercero fue ajustar las superficies de los lotes, inicialmente eran 96 lotes y actualmente bajaron a 63 lotes creo, entonces finalmente se le dio el trato de lotificación, es decir que pagaron todo lo que corresponde a Protección Civil, a Ecología, y demás Departamentos, para poder regular, este es el plano final de esa lotificación, regulamos también los anchos de calles, de un mínimo de 12 mts y obviamente les normamos el nombre de las calles, también pasa mucho que subdividen y se quedan con calles que no tienen ninguna referencia;

No habiendo más dudas ni comentarios, el **Lic. Raúl Ortega Rodríguez** refiere que se someten a su consideración, las propuestas de subdivisión que presenta en este punto la Dirección de Obras Públicas los expedientes del 1.1 al 1.16, proponiéndose por la Dirección queden pendientes por lo que ya se acordó en la Mesa Colegiada los expedientes 1.2, 1.5 y 1.6, presentándose para su aprobación los Expedientes 1.1, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 y 1.16; quien esté por la afirmativa favor de expresarlo levantando su mano, **APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE 15 QUINCE VOTOS A FAVOR, DE LOS 15 QUINCE MIEMBROS PRESENTES EN EL ACTO.**

Como punto **2.1 y 2.2** de trámite de fusión, con la explicación que ya dio la Directora de Obras Públicas, quien esté por la afirmativa favor de expresarlo levantando su mano, **APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE 15 QUINCE VOTOS A FAVOR, DE LOS 15 QUINCE MIEMBROS PRESENTES EN EL ACTO.**

Como punto **3.1 a 3.4** de trámite de subdivisión y fusión, con la explicación que ya dio la Directora de Obras Públicas, quien esté por la afirmativa favor de expresarlo levantando su mano, **APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE 15 QUINCE VOTOS A FAVOR, DE LOS 15 QUINCE MIEMBROS PRESENTES EN EL ACTO.**

Del punto **4.1 y 4.2** de trámite de subdivisión y fusión, con la explicación que ya dio la Directora de Obras Públicas, quien esté por la afirmativa favor de expresarlo levantando su mano, **APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE 15 QUINCE VOTOS A FAVOR, DE LOS 15 QUINCE MIEMBROS PRESENTES EN EL ACTO.**

De igual manera se somete a su consideración el punto **5**, de la solicitud presentada por la Empresa URBAMERK por medio de su Representante Legal el [REDACTED], con la explicación que ya dio la Directora de Obras Públicas, quien esté por la afirmativa favor de expresarlo levantando su

mano, **APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE 15 QUINCE VOTOS A FAVOR, DE LOS 15 QUINCE MIEMBROS PRESENTES EN EL ACTO.**

Asimismo se somete a su consideración el punto **6**, de la solicitud presentada por el C. Daniel Espinosa Nieto, con la explicación que ya dio la Directora de Obras Públicas, quien esté por la afirmativa favor de expresarlo levantando su mano, **APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE 15 QUINCE VOTOS A FAVOR, DE LOS 15 QUINCE MIEMBROS PRESENTES EN EL ACTO.**

Pasando al punto **7** de la solicitud presentada por el C. Alberto Sifuentes Corpus, con la explicación que ya dio la Directora de Obras Públicas, quien esté por la afirmativa favor de expresarlo levantando su mano, **APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE 15 QUINCE VOTOS A FAVOR, DE LOS 15 QUINCE MIEMBROS PRESENTES EN EL ACTO.**

Como punto **8** de la solicitud presentada por la C. [REDACTED], apoderada legal de MATC Digital S. de R.L. de C.V., para la autorización de Licencia de uso de suelo con la explicación que ya dio la Directora de Obras Públicas, quien esté por la afirmativa favor de expresarlo levantando su mano, **APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE 15 QUINCE VOTOS A FAVOR, DE LOS 15 QUINCE MIEMBROS PRESENTES EN EL ACTO.**

Y por último como punto **9** de la solicitud que hace el propio Ayuntamiento de Matehuala para que se pueda aprobar la regularización de la tenencia de la tierra de diversos predios propiedad del Municipal a favor de los poseionarios del Fracc. Matehuala y los cuales son Francisca Aracely Ortega Reta, Luis Armando Pecina Castilleja, José Guadalupe Cruz Tristán y Miguel Ángel Grimaldo Mendoza, quien esté por la afirmativa favor de expresarlo levantando su mano, **APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE 15 QUINCE VOTOS A FAVOR, DE LOS 15 QUINCE MIEMBROS PRESENTES EN EL ACTO.**

Concluyendo así el punto número tres.

4.- Punto cuatro del orden del día que corresponde a la PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS, 46, 73, 99 Y 117, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ, toma la palabra el **Lic. Raúl Ortega Rodríguez** para decir que se recibió por parte del Honorable Congreso Del Estado, el expediente Minuta Proyecto de Decreto a través del Oficio Número: 3030, con fecha agosto 24, 2023, al cual si me permiten daré lectura la **EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**. Para legislar bajo el principio pro-persona, y maximizar la protección de los derechos humanos, con sustento en la resolución pronunciada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Acción de Inconstitucionalidad 98/2022, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que demandó la invalidez de diversos ordenamientos del Estado de Yucatán; así como en el "Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los modelos de formatos "3 de 3

Contra la Violencia" a efecto de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género", publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte ; el que en el punto 11 de los considerandos, en la parte que interesa se lee: "11. Motivación que sustentó el capítulo VIII del 3 de 3 Contra la Violencia En el siguiente apartado se explica las razones que dan sustento del 3 de 3 Contra la Violencia contenidos en los Lineamientos. a) Capítulo I. Del 3 de 3 contra la violencia. Se estima que la implementación de las medidas incluidas en el apartado 3 de 3 contra la violencia se ajusta a la obligación contenida en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de promover, respetar, proteger, y garantizar los derechos humanos de las mujeres, que se impone a todas las instituciones del Estado mexicano, incluyendo a los partidos políticos. Asimismo, es acorde con los estándares internacionales en la protección de los derechos humanos, específicamente al ajustarse a las recomendaciones realizadas por los organismos internacionales especializados en la protección de los derechos humanos de las mujeres, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém Do Pará) y la Convención para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas (CEDAW por sus siglas en inglés). En ese sentido, se considera que las medidas que se denominan 3 de 3 contra la violencia incluidos en los citados Lineamientos, se ajustan a la recomendación número 35 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, al corresponder a medidas en la esfera de la prevención y protección orientadas a la erradicación de la violencia de género en el ámbito de la participación política. Conforme a la recomendación en comento, los Estados Parte deben adoptar medidas tendentes a acelerar la eliminación de la violencia por razón de género, lo que incluye la violencia política contra la mujer en las que se reconozca a las mujeres como titulares de derechos, se promueve su capacidad de actuar y su autonomía, así como aquellas medidas necesarias para abordar las causas subyacentes de la violencia en razón de género, en particular las actitudes patriarcales, estereotipos, la desigualdad en la familia y el incumplimiento o la denegación de los derechos civiles, políticos, económicos sociales y culturales de la mujer, promoviendo el empoderamiento, la capacidad de acción y las opiniones de las mujeres. Con las medidas 3 de 3 contra la violencia, se persigue inhibir conductas que contribuyan a la cultura patriarcal que fomentan la desigualdad estructural entre hombres y mujeres, como son la violencia familiar y/o doméstica, la violencia sexual, el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, porque estas conductas afectan en forma desproporcionada a las mujeres. Si conforme a la Base I del artículo 41 constitucional, los partidos políticos son entidades de interés público y, como organizaciones ciudadanas, hacen posible su acceso al ejercicio del poder público. Entonces, resulta claro que los partidos políticos son el vehículo para que la ciudadanía acceda a los cargos de elección popular, a través de las candidaturas que estos postulen. La otra vía prevista en la Constitución de acceso de la ciudadanía a un cargo de elección popular lo constituyen las candidaturas independientes, por lo que también resulta necesario que las personas que aspiren a obtener una candidatura independiente presenten de igual forma el formato de buena fe y bajo protesta de decir verdad relacionado con las medidas 3 de 3 contra la violencia. Es evidente que la sociedad mexicana exige que se erradique la violencia en todas sus formas y manifestaciones, de manera especial la que afecta a las mujeres por razones de género derivado de las causas estructurales que perpetúan la desigualdad y discriminación; motivo por el cual, rechaza

la violencia. Muestra de ello, son las reformas aprobadas en los últimos años para erradicar la violencia contra las mujeres, incluyendo la emisión de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; así como la más reciente reforma publicada el 13 de abril de 2020, sobre violencia política contra las mujeres por razón de género. La manera más eficaz de evitar que personas violentadoras de mujeres y de los derechos familiares accedan a los cargos de elección popular, es que los partidos políticos exijan a las personas interesadas en acceder a una candidatura que declaren que no han incurrido en alguna situación de violencia de género ni familiar y que ninguna persona que aspire a una candidatura independiente, haya incurrido en estos supuestos. Por esa razón, en el artículo 32 de los Lineamientos, se incluye un mecanismo que vela por la implementación de la propuesta conocida como 3 de 3 contra la violencia, al exigir a los sujetos obligados que cada persona aspirante a una candidatura firme un formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde manifieste que no ha sido condenada, o sancionada mediante Resolución firme por: I. Violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público. II. Por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal. III. Como persona deudora alimentaria morosa que atente contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios. Así, se considera que esta obligación que corresponde a los partidos políticos y aspirantes a una candidatura independiente consistente en solicitar a las personas aspirantes a una candidatura que manifiesten no estar en alguna de las hipótesis referidas, por sí misma constituye una medida que promueve que quienes aspiren a acceder a una postulación de un partido político en una candidatura o por una candidatura independiente a un cargo de elección popular no incurran en conductas que social y culturalmente son connotativas de la perpetuación de actitudes de dominio y actos discriminatorios patriarcales en contra de las mujeres por razón de género. En ese sentido, se considera que a través del 3 de 3 contra la violencia se instrumenta una medida reglamentaria que posibilitará garantizar a la ciudadanía y a la sociedad en su conjunto, que tanto las personas que los partidos políticos postulan en las candidaturas como los aspirantes a una candidatura independiente, no detentan antecedentes que, por su naturaleza, son indicativos de que la persona aspirante a la titularidad de una candidatura a cargo de elección popular es proclive a ejercer conductas constitutivas de violencia en contra de las mujeres por razón de género. Ejercer un cargo de elección popular reviste de gran importancia, por las facultades conferidas, decisiones que se pueden adoptar y el manejo de recursos públicos que están a su disposición; razón por la cual, desde los partidos políticos se debe garantizar la idoneidad de las personas que aspiran a ocupar y permanecer en dichos cargos públicos, y verificar que no hayan incurrido en actos u omisiones que violenten o afecten de manera desproporcionada a las mujeres. Esta exigencia contenida en el artículo 32 de los Lineamientos en comento, se basa en el reconocimiento de que las personas que acceden a un cargo de elección popular, así como las y los servidores públicos deben respetar los derechos de las mujeres. Razón por la cual, se debe conocer si una persona que aspira a una candidatura incurrió en una conducta que violenta a las mujeres y fue condenado o sancionado por esa circunstancia, pues de ser el caso no cumpliría con la exigencia prevista en la denominada 3 de 3 contra la violencia. Al partirse de la base de que las personas agresoras no están en condiciones de actuar con la finalidad de prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, flagelo que se debe erradicar. Indiscutiblemente, la violencia no sólo afecta a la población femenina,

pero la violencia familiar, la violencia sexual y la violencia de género, así como la negativa de los progenitores a solventar las pensiones alimentarias, afectan en forma desproporcionada a las mujeres. Por esto, esta medida 3 de 3 contra la violencia, refiere los problemas más graves que viven las mujeres y que están más generalizados, con la finalidad de que se erradiquen, y un mecanismo importante es evitar que accedan a los cargos de elección popular las personas que incurren en alguna de las tres conductas referidas en el artículo 32 de los Lineamientos en mención. El mensaje que se transmite con la exigencia 3 de 3 contra la violencia es contundente, en el sentido de que las personas que tengan antecedentes como agresoras por violencia familiar, violencia sexual, violencia en razón de género en cualquiera de sus modalidades, o por incumplimiento de obligaciones alimentarias -salvo aquellas que al momento de la firma del formato comprueben estar al corriente-, no podrán acceder a un cargo de elección popular, al no tener las cualidades que se requieren para representar los intereses de la sociedad mexicana al violentar a las mujeres; máxime que la población mexicana se conforma por un 51% de mujeres, además de que representan similar porcentaje de la lista nominal de electores y las mujeres son las que más votan en las elecciones, y lo que se busca es lograr una democracia representativa de manera sustantiva, en la que los hombres y mujeres tengan igualdad de oportunidades, lo que empieza por respetar los derechos de las mujeres y no violentarlas." Se reforman los artículos, 46, 73, 99, y 117, de la Constitución Política del Estado, ello es así porque la violencia contra las mujeres en México es uno de los más graves problemas sociales que ha incrementado su incidencia, así como la brutalidad con la que se comete. Esta violencia contra las mujeres, lamentablemente, en algunas ocasiones ha sido cometida por funcionarios públicos, representantes populares y políticos, quienes deberían ser los primeros comprometidos con el cese y erradicación de estas inaceptables conductas, actos que contribuyen a generar una percepción de permisividad hacia esa violencia, que deteriora de forma sensible la confianza que se les brinda a quienes tienen la obligación de llevar a cabo acciones contra la violencia de género, pues éstos no podrían hacerlo si son perpetradores de ese flagelo. ÚNICO. Se reforma los artículos, 46, 73, 99, y 117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, para quedar como sigue ARTÍCULO 46. Para ser diputada o diputado se requiere: I. Ser ciudadana o ciudadano potosino en ejercicio de sus derechos; II. Tener la calidad de potosina o potosino por nacimiento, con residencia efectiva en el Estado no menor de seis meses inmediatos anteriores al día de la elección y, si es por vecindad, la residencia efectiva inmediata anterior al día de la elección deberá ser no menor de tres años, a partir de la adquisición de aquella; III. ...; IV. ..., y V. No estar en alguno de los siguientes supuestos: a) Tener sentencia condenatoria que haya causado estado, por violencia familiar; o delitos contra las mujeres por razón de género. b) Tener sentencia condenatoria que haya causado estado por los delitos: contra la libertad sexual; la seguridad sexual; y el normal desarrollo psicosexual, o c) Estar registrado o registrada en el padrón de personas deudoras alimentarias morosas o en caso de serlo, demostrar que ha pagado en su totalidad los adeudos alimenticios. ARTÍCULO 73. Para ser Gobernador o Gobernadora del Estado se requiere: I. Ser ciudadana o ciudadano potosino en pleno goce de sus derechos; II. Si se tiene la calidad de potosino o potosina por nacimiento, contar con una residencia efectiva no menor de un año inmediato anterior al día de la elección y, si es por vecindad, la residencia efectiva deberá ser no menor de cinco años contados a partir de la adquisición de esa; III. No estar en el servicio activo del ejército Nacional, a menos que se separe de su encargo por lo menos un año antes del día de la

elección; IV. No ser titular de Secretaría o Subsecretaría de Estado; de la Fiscalía General del Estado, o de presidencia municipal, a menos de que se separe de su encargo cuando menos ciento veinte días antes del día de la elección; V. No tener una multa firme pendiente de pago, o que encontrándose sub júdice no esté garantizada en los términos de las disposiciones legales aplicables, que haya sido impuesta por responsabilidad con motivo de los cargos públicos que hubiere desempeñado en la administración federal, estatal o municipal; VI. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso, a menos que se separe formal, material y definitivamente de su ministerio en la forma y con la anticipación establecida en la Ley Reglamentaria del artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y VII. No estar en alguno de los siguientes supuestos: a) Tener sentencia condenatoria que haya causado estado, por violencia familiar; o delitos contra las mujeres por razón de género. b) Tener sentencia condenatoria que haya causado estado por los delitos: contra la libertad sexual; la seguridad sexual; y el normal desarrollo psicosexual, o c) Estar registrado o registrada en el padrón de personas deudoras alimentarias morosas o en caso de serlo, demostrar que ha pagado en su totalidad los adeudos alimenticios.

ARTÍCULO 99. Para ser Magistrado o Magistrada del Supremo Tribunal de Justicia se requiere: I. Ser ciudadana o ciudadano potosino en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; II. Tener al día de su nombramiento, título profesional de licenciatura en derecho, abogada o abogado, con una antigüedad mínima de diez años, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello y acreditar el ejercicio profesional por el mismo tiempo; III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que haya ameritado pena privativa de libertad de más de un año; pero, si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; IV. Haber residido en el Estado durante los dos años anteriores al día de su nombramiento; V. No haber sido titular de Secretaría de Despacho o su equivalente; de la Fiscalía General del Estado; diputado o diputada local, o titular de presidencia municipal, en el año inmediato anterior al día de su nombramiento. Para ser titular de magistratura supernumeraria deberán cumplirse los mismos requisitos, y VI. No estar en alguno de los siguientes supuestos: a) Tener sentencia condenatoria que haya causado estado, por violencia familiar; o delitos contra las mujeres por razón de género. b) Tener sentencia condenatoria que haya causado estado por los delitos: contra la libertad sexual; la seguridad sexual; y el normal desarrollo psicosexual, o c) Estar registrado o registrada en el padrón de personas deudoras alimentarias morosas o en caso de serlo, demostrar que ha pagado en su totalidad los adeudos alimenticios. Los nombramientos de las magistradas y los magistrados deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia; o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes en el ejercicio de la profesión del derecho.

ARTÍCULO 117. Para ser miembro del Ayuntamiento, Concejo, o titular de delegación municipal, se requiere: I. Ser ciudadana o ciudadano potosino en pleno goce de sus derechos; II. Ser originaria u originario del municipio y con un año por lo menos de residencia efectiva en el mismo, inmediata anterior al día de la elección o designación, en su caso; o ser vecina o vecino del mismo, con residencia efectiva de tres años inmediata anterior al día de la elección, o designación; III. ...; IV. ..., y V. No estar en alguno de los siguientes supuestos: a) Tener sentencia condenatoria que haya causado estado, por violencia familiar; o delitos contra las mujeres por razón de género. b) Tener sentencia condenatoria que haya causado

estado por los delitos: contra la libertad sexual; la seguridad sexual; y el normal desarrollo psicosexual, o c) Estar registrado o registrada en el padrón de personas deudoras alimentarias morosas o en caso de serlo, demostrar que ha pagado en su totalidad los adeudos alimenticios. T R A N S I T O R I O S. PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado "Plan de San Luis", previo procedimiento que aluden los párrafos, primero, y segundo del artículo 138 de la Constitución Local. SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. Lo tendrá entendido el Ejecutivo del Estado, lo hará publicar, circular y obedecer. D A D O en el salón de sesiones "Ponciano Arriaga Leija" del Honorable Congreso del Estado, en Sesión Extraordinaria, el veinticuatro de agosto del dos mil veintitrés. Honorable Congreso del Estado. Por la Directiva. Primera Secretaria: Legisladora Liliana Guadalupe Flores Almazán. Presidenta: Legisladora Cinthia Verónica Segovia Colunga. Segunda Secretaria: Legisladora María Claudia Tristán Alvarado. Al concluir su lectura se puso a consideración, toma la palabra la **Regidora María del Carmen Vázquez Salinas** para decir que quiere agregar su opinión al respecto de esta Minuta que nos hace llegar el Congreso del Estado y la cual me parece de importancia por las acciones que dentro de mi comisión he estado apoyando y ahora son mi causa, en esta Minuta con Proyecto de Decreto 3030, donde se presenta la Iniciativa propuesta por la Dip. Ema Idalia Salgado Guerrero tiene como propósito modificar los Artículos 46, 73, 99 y 117 de la Constitución Política del Estado y además de adicionar dos Fracciones, tomo con mucho agrado esta Iniciativa que tiene como único enfoque prevenir y atender la violencia contra las mujeres en cualquier de sus manifestaciones y esto toma sentido cuando la propuesta es establecer dos nuevos requisitos para poder acceder a los cargos de Diputado Local, Gobernador, Magistrado del Supremo Poder de Justicia, Magistrado de supernumerario, Consejero de la Judicatura y miembro del Ayuntamiento, es decir el Art. 46 que establece los requisitos para ser Diputado, el Art. 99 nos habla de los requerimientos para ser Gobernador, y el 73 de lo necesario para ser Magistrados tanto del Tribunal de Justicia y Supernumerario y también miembro del Consejo de la Judicatura Estado, y también el Art. 117 de los requisitos para ser miembro del Ayuntamiento, que incluye por supuesto Presidente Municipal, Art. 114 Fracción I de la conformación de los Ayuntamiento, además de todas estas condiciones que se requiere para ser postulado, se adicionan dos requerimientos, uno es no se deudor alimentario moroso, dos.- no tener antecedentes penales por violencia familiar, delitos contra la actividad personal, contra la imagen personal, violencia laboral contra las mujeres, violencia obstétrica, violencia por parentesco, violencia institucional, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro o violación o feminicidio, coincido en la observación de los derechos humanos y también el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que esto se considere inherente al servicio público porque tales garantías están presentes en el marco jurídico que orienta la actuación de los servidores públicos; también quiero resaltar que en esta iniciativa en sus argumentos tiene el respaldo de acciones que han sumado a inhibir la violencia que se comete contra la mujer, en enero de este año se realizó la declaratoria de aprobación de la reforma de los Artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conocida como la Ley 3 de 3, contra la violencia, luego de que 23 Congresos Estatales respaldaron los cambios, ésta en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión en el servicio público, establece la suspensión de los derechos o prerrogativas de los ciudadanos por tener sentencia firme por la Comisión Internacional de Delitos contra la vida y la integridad corporal y la

seguridad sexual, asimismo por violencia familiar, equiparada o doméstica, y violación a la intimidad por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos, y por ser declarada una persona deudora alimentaria morosa, en los supuestos de ésta fracción la persona no podrá ser registrada como candidato a cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrado para algún empleo, cargo o comisión en el servicio público. Ésta Reforma entró en vigor el 30 de mayo de este año. Celebro porque nunca más hombres violentadores, abusadores, acosadores, o deudores alimentarios estarán en los espacios donde se tomen decisiones. Por último le reconozco al Congreso del Estado, en especial a los Legisladores de la Comisión de puntos constitucionales, Justicia y de Gobernación, que demostraron con hechos su compromiso con los Derechos Humanos de las Mujeres ya que la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, constituye un obstáculo para el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Además de que con ello se busca mandar a la sociedad un mensaje de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como de ética en el servicio público, pues cambian los estándares en la responsabilidad pública e institucional. Muchas gracias. Al no haber más intervenciones, se sometió a votación la Minuta Proyecto de Decreto de referencia, y resultaron 15 quince votos a favor; o cero abstenciones; y o cero votos en contra, de los 15 quince miembros presentes en el acto; declarándose aprobada por: **UNANIMIDAD** en todos sus términos y para los efectos de la parte relativa de los párrafos, primero, y segundo, del artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

5.- Punto cinco del orden del día que corresponde a la PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS, 53, 54, 57 en su fracción XII, 124 BIS en su fracción III los párrafos segundo y tercero, Y 135 en sus párrafos segundo y quinto, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ, toma la palabra el **Lic. Raúl Ortega Rodríguez** para decir que se recibió por parte del Honorable Congreso Del Estado, el expediente Minuta Proyecto de Decreto a través del Oficio Números: 1035, 1036, 1044, 1950, 2211, 2212, 2509, 2541, 2573, 2678, 2716 y 3537, con fecha agosto 24, 2023, al cual si me permiten daré lectura la **EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), en 2021, 57.1 % de la población mexicana consideró que la corrupción era uno de los problemas más importantes en su entidad federativa. Se ubicó solo por debajo de la inseguridad y la delincuencia. El concepto de corrupción es un género que engloba diversas conductas -o especies conductuales- que impactan horizontalmente en todos los espacios de la vida pública y privada de un país, colonizando y minando los espacios de institucionalidad. Aunque ordinariamente no se analiza desde esa perspectiva -por la forma en la que se encuentran relacionados los indicadores planteados por las instituciones- la corrupción tiene un mayor impacto sobre los derechos económicos y sociales que sobre los derechos civiles y políticos, debido a que los actos de corrupción conllevan una disminución de la bolsa presupuestaria (por lo que también se impacta el principio de máximo uso de recursos disponibles). La fiscalización es una inversión con alto rendimiento social que coadyuva a erradicar la corrupción y que, en conjunto con la rendición de cuentas, es un factor invaluable para la gobernabilidad, la gobernanza y el desarrollo de las sociedades. Una entidad de fiscalización superior tiene tres funciones básicas: a) fiscalizar, mediante el control

externo de los recursos públicos ejercidos; b) asesorar, a través del acompañamiento a los poderes públicos, antes, durante y de forma posterior al ciclo financiero y c) informar, lo cual se traduce en el derecho y a la vez, obligación, que tienen las entidades de fiscalización superior de rendir cuentas al Poder Legislativo, a otros poderes públicos y a la sociedad. Durante 2021 y 2022, se suscitaron dos acontecimientos cruciales que nos mostraron que esas funciones básicas hacía tiempo que no se estaban cumpliendo; el primero, ocurrió en la sesión ordinaria 15 de noviembre de 2021, en la que, por mayoría de votos, la LXIII Legislatura acordó no aprobar el Informe General y los Informes Individuales de auditoría emitidos por la Auditoría Superior del Estado, como resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020 de 114 entes auditables. El segundo, tuvo lugar en el mes de junio de 2022, cuando se dio a conocer a la Comisión de Vigilancia el informe de resultados y observaciones preliminares de la auditoría practicada a los recursos del capítulo 1000 del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, por instrucción de la citada Comisión. Desafortunadamente, para las potosinas y potosinos, los sucesos exteriorizaron aspectos negativos y alarmantes que pusieron en entredicho la funcionalidad e incluso el objeto de la Auditoría Superior del Estado, tales como: i) que las personas servidoras públicas que coordinaron, auditaron y auxiliaron en las labores de fiscalización superior, no conocían los lineamientos técnicos, criterios y métodos para la selección y ejecución de auditorías, por lo tanto, su trabajo presentó inconsistencias, errores y ausencia de objetividad; ii) que las personas servidoras públicas señaladas, no tenían conocimiento de la existencia del Servicio Fiscalizador de Carrera, no recibieron capacitación ni se evaluó su desempeño; iii) que en las reuniones que tuvieron por objeto ampliar o aclarar el contenido del Informe General, las personas que fungieron como auditoras presentaron información insuficiente y demostraron falta de claridad en los procesos y acciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado; iv) que el cincuenta y cinco por ciento del personal del Órgano Técnico se ocupa en labores administrativas o jurídico administrativas y solo el cuarenta y cinco por ciento participó directamente en las labores de fiscalización; v) que se cubrieron sueldos y percepciones de trabajadores del Servicio de Fiscalizador de Carrera y de Organización y Métodos, sin que hubiera evidencia del programa anual de trabajo, ni de acciones implementadas; vi) que sesenta personas servidoras públicas no cumplieron con el perfil profesional adecuado y/o con el título y cédula profesional para realizar la función de fiscalización; y vii) que, en la pasada administración, aumentó la plantilla de personal sindicalizado, dado que, se dio de alta a 78 personas servidoras públicas bajo ese régimen. Aunado a ello, en el primer trimestre de 2022, nuestra participación en la aprobación del instrumento normativo de planeación estatal 2021-2027, puso en nuestras manos una radiografía que nos reveló un Estado afectado por la corrupción, la pobreza, el atraso económico y por una infraestructura urbana, carretera, hídrica, turística, científica y tecnológica deficiente. Por lo tanto, ese diagnóstico también reafirmó, que el Órgano Técnico del Poder Legislativo no estaba efectuando correctamente sus funciones básicas, especialmente, la de fiscalizar la gestión financiera de los entes auditables para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, así como, la de verificar el grado de cumplimiento de los objetivos de los programas que correspondan a los entes públicos. Bajo esas condiciones, es fundamental dar nueva vida a la Entidad de Fiscalización Superior del Estado, a través de una organización gubernamental que genuinamente coloque en el centro de sus acciones a la ciudadanía como principal beneficiaria y se caracterice por su cultura de acción contra la corrupción, alto desempeño, profesionalismo y liderazgo. Por lo

señalado, se plantean las presentes modificaciones con el objeto de dotar al Órgano Técnico de Fiscalización del Poder Legislativo, de herramientas que le permitan realizar sus funciones centrales con eficiencia y calidad, puesto que, de esa forma construiremos la ruta que conducirá a las personas servidoras públicas de las entidades fiscalizadas y los particulares involucrados en el ejercicio de los recursos públicos a tomar decisiones éticas y fortalecer su responsabilidad. Las líneas esenciales de la reforma son las siguientes: 1. Transformación de la Entidad de Fiscalización Superior en el Instituto de Fiscalización Superior del Estado. Se modifican los artículos 53, 54, 57, 124 BIS, 125 y 135, de la Constitución local, diversas disposiciones de ordenamientos secundarios y se expide una nueva Ley de Fiscalización Superior del Estado, para sustituir la denominación de Auditoría Superior del Estado por Instituto de Fiscalización Superior del Estado, con el objeto de fortalecer el marco de acción que se confiere al Órgano Técnico a nivel constitucional y legal, así como para dotarle de una nueva identidad que le permita desligarse de sucesos como los expuestos en líneas precedentes y asumirse como un factor decisivo que impulse a los poderes del Estado, gobiernos municipales, organismos constitucionales autónomos y demás entidades fiscalizadas, a hacer un mejor uso de los recursos a su disposición. 2. Establecimiento de la función de fiscalización superior como eje rector de la vigilancia del ejercicio de los recursos públicos. Se modifican los artículos 53 y 54, de la Constitución Política del Estado, ordenamientos secundarios y se expide nueva Ley de Fiscalización Superior del Estado, para establecer la fiscalización como una función, que comprende la revisión y fiscalización de las cuentas públicas de las entidades fiscalizadas, con el objeto de evaluar los resultados de su gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en los presupuestos de egresos y demás disposiciones legales aplicables, y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. Asimismo, tomando como parámetro lo establecido en los artículos 74, fracción VI y 79, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estipula que si de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. De igual forma, se adiciona que, en el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha autoridad sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos que disponga la Ley. En la misma tónica, siguiendo las directrices de la Constitución Federal, se establece que el Instituto de Fiscalización Superior del Estado, tendrá autonomía para decidir sobre sus resoluciones y que la función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, imparcialidad, confiabilidad y definitividad. En otro aspecto, en relación con la revisión y análisis de los informes de auditoría, en la Ley de Fiscalización Superior del Estado, se estipula que la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización, con el apoyo de los servicios de asesoría asignados, revisará y analizará el Informe General, los informes individuales y, en su caso, los informes específicos que le presente el Instituto de Fiscalización Superior, a efecto de determinar si la función de fiscalización se realizó con apego a las disposiciones constitucionales, legales y normativas aplicables en materia de fiscalización y auditoría, lo que resolverá mediante dictamen. En este sentido, en el artículo 72, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, se adicionan los elementos que debe contener dicho dictamen, mientras que en el ordinal 73, se amplía el plazo para someterlo a consideración del Pleno, por ende, la fecha límite pasa del 15

de noviembre del año en que hayan sido presentadas las cuentas públicas, al 15 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, lo que permitirá a la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización, analizar y evaluar adecuadamente los informes de referencia y el correcto ejercicio de la función de fiscalización que desempeña el Instituto. 3. Modificación del procedimiento y plazos para la entrega y revisión de la Cuenta Pública. Se reduce el plazo para que las entidades fiscalizadas entreguen al Congreso del Estado la Cuenta Pública, por lo que se reforman los artículos 53, párrafo tercero y 54, de la Constitución Política del Estado, con la finalidad de que el órgano fiscalizador cuente con mayor tiempo para examinar la cuenta pública, por lo tanto, la fecha límite de entrega pasa del 15 de marzo del año siguiente al que corresponda su ejercicio, al último día del mes de febrero del año siguiente al de su ejercicio. Por otro lado, se amplía el plazo para que el Instituto de Fiscalización Superior del Estado, concluya la revisión de las cuentas públicas, por ende, la fecha límite pasa del 31 de octubre del año en que hayan sido presentadas al último día del mes de noviembre del año de su presentación. Las modificaciones planteadas, permitirán que el Instituto de Fiscalización Superior del Estado efectúe de forma más sólida, detallada y eficiente su función de fiscalización, ya que, el plazo establecido en las disposiciones vigentes, es insuficiente para revisar la información presentada por 114 entidades fiscalizadas. En otro aspecto, la reducción del plazo para la presentación de las cuentas públicas por parte de los entes auditados, no implica una carga desmedida para éstos, dado que, a raíz de la publicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos cuentan con sistemas de contabilidad para el registro armónico, delimitado y específico de las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos. Incluso, dichos sistemas generan estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, por lo tanto, la información que tienen que integrar a la Cuenta Pública se encuentra disponible y actualizada. Siguiendo ese esquema, en los artículos 34 y 37, de Ley de Fiscalización Superior del Estado, se establece que el Instituto de Fiscalización Superior tendrá un plazo que vence el primer día del mes de diciembre del año en que se presentó la Cuenta Pública, para rendir el Informe General y los Informes Individuales al Congreso del Estado. Asimismo, en el citado ordenamiento, se reformula la atribución del Congreso del Estado, relacionada con la revisión del Informe General e Informes Individuales, con el objeto de evaluar el trabajo del órgano fiscalizador y determinar si dichos informes se apegaron a las disposiciones legales aplicables. Por lo tanto, en la nueva Ley de Fiscalización se especifica que la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización, revisará y analizará el Informe General y los Informes Individuales y emitirá el dictamen en el que se determinará si estos se apegan o no las disposiciones constitucionales, legales y normativas aplicables en materia de fiscalización y auditoría, debiéndolo someter a la aprobación del Pleno a más tardar el 15 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública. Es importante destacar que, las disposiciones vigentes indican que el Congreso del Estado tendrá hasta el día quince del mes de noviembre del mismo año de la presentación de la Cuenta Pública para emitir dicha determinación, sin embargo, en comparación con el plazo del cual dispone la Entidad de Fiscalización Superior para integrar los informes, el otorgado a esta Soberanía para llevar a cabo su análisis resulta demasiado breve para hacerlo con la exhaustividad y calidad requeridas, de ahí la pertinencia de su extensión. 4. Establecimiento de nuevos requisitos y bases para el nombramiento de la persona titular del Órgano Técnico de Fiscalización. 5. En el artículo 77 de la Ley se establecen nuevos requisitos para ser titular

del Instituto de Fiscalización Superior, lo anterior atendiendo a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2023, mediante la cual se adicionó al artículo 38 la fracción VII que establece la prohibición a las personas de participar en cualquier cargo de elección popular, o ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público, cuando éstas cuenten con sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, así como por haber sido declarada como persona deudora alimentaria morosa. Por otra parte en el artículo 78 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, se establece el procedimiento para llevar a cabo el nombramiento de la persona titular del Instituto Superior de Fiscalización, el cual constará de las siguientes etapas: I. El Congreso emitirá una convocatoria pública la cual será propuesta por la Comisión. Aprobada la convocatoria, se publicará en el Periódico Oficial del Estado, en dos de los diarios de mayor circulación en la Entidad, y en la página electrónica del Congreso; II. La convocatoria deberá contener, al menos: a) Periodo, horario y lugar de recepción de las solicitudes de participantes; b) Los requisitos de elegibilidad para ser titular del Instituto de Fiscalización Superior, y c) Los documentos que deberán presentar los participantes para acreditar el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el inciso anterior. III. El desahogo del procedimiento correrá a cargo de la Comisión; IV. Una vez agotadas las etapas del procedimiento, la Comisión emitirá un dictamen que contendrá una lista con los nombres de todas las personas que se consideren elegibles al cargo. V. El Congreso nombrará de entre las personas elegibles al cargo, a la persona titular del Instituto de Fiscalización Superior, y VI. Efectuado el nombramiento, se citará a la persona para que rinda la protesta de ley ante el Pleno del Congreso. Asimismo, se establece que las actuaciones de la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización, carecerán de definitividad y, por lo tanto, se entenderán firmes hasta la aprobación del dictamen por parte del Pleno del Congreso. Como se ve, esta estructura contiene las bases esenciales que deberá observar el Congreso del Estado para el nombramiento de la persona titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, aunado a que, con dicha configuración se garantizará el acceso al servicio público en igualdad de oportunidades con base en la capacidad y la especialización, puesto que, el Pleno del Congreso realizará el nombramiento de entre todas las personas participantes que resulten elegibles al cargo de titular del Órgano Técnico. Por otra parte, con base en el artículo 116, fracción II, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera pertinente ampliar el periodo de duración del cargo de la persona titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, pasando de 7 a 9 años sin derecho a la reelección, lo que se da cuenta en el artículo 54 de la Constitución local y se reproduce en el artículo 76 de la nueva Ley de Fiscalización Superior del Estado. Igualmente en el ordinal 8o de la Ley en cita, se establece que, en caso de falta definitiva, la persona que asuma la titularidad del Instituto Superior de Fiscalización será nombrada por un nuevo periodo de nueve años y no para concluir el periodo en curso, como se estipula en el marco normativo vigente. En otro aspecto, se modifica el párrafo final del artículo 54 de la Constitución Política del Estado, así como las disposiciones secundarias relacionadas, con el objeto ampliar el espectro de personas participantes a ocupar la titularidad del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, privilegiando así, la especialización que exige el ejercicio de la función de fiscalización. Al respecto, resulta conveniente destacar

la libertad configurativa estipulada en el artículo 116, fracción II, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acerca del establecimiento de los órganos de fiscalización superior de las entidades federativas y los requisitos que deben reunir sus titulares: La porción normativa referida es del tenor literal siguiente: "...Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público. El titular de la entidad de fiscalización de las entidades federativas será electo por las dos terceras partes de los miembros presentes en las legislaturas locales, por periodos no menores a siete años y deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades." De la transcripción se obtiene que, las legislaturas de los estados en relación con el nombramiento de las personas titulares de los órganos de fiscalización, deberán circunscribirse a la norma fundamental en lo concerniente a los siguientes elementos: a) Votación para la elección: se requiere las dos terceras partes de los miembros presentes en las legislaturas; b) Temporalidad del cargo: periodos no menores a siete años, y c) Experiencia: cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades. En consecuencia, fuera de ese contenido mínimo, las legislaturas de los estados cuentan con libertad para establecer los requisitos de acuerdo a sus necesidades históricas, políticas, sociales y culturales; a modo de ejemplo, se traen a cuenta las leyes de fiscalización de los Estados de Querétaro y Michoacán, de cuyos artículos 70 y 5, se desprende que, precisamente atendiendo a esas necesidades regionales, las limitantes para acceder al cargo se tornan más flexibles siempre en pro de la especialización de la persona que pueda ocupar la encomienda. Bajo esa tesitura, con la finalidad de privilegiar las capacidades técnicas y especialización requerida para desempeñar exitosamente las funciones de la Entidad de Fiscalización Superior, las personas interesadas en participar deberán cumplir los requisitos estipulados en el artículo 99, fracciones I y IV, de la Constitución local, así como los señalados en la Ley de Fiscalización Superior del Estado.

6. Modificación de la denominación, conformación y funcionamiento de la Comisión de Vigilancia y fortalecimiento de sus atribuciones. Con la finalidad de optimizar las aristas funcional y orgánica del órgano colegiado encargado de coordinar las relaciones entre el Congreso y el Instituto de Fiscalización Superior, se modifican diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, Ley de Fiscalización de la Entidad, y Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, para sustituir la denominación de la Comisión de Vigilancia por Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización, en armonía con los cambios planteados en el punto 2 que antecede. Por otro lado, se modifica el artículo 91 de Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, por lo tanto, la integración de la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización, se regirá por lo establecido en el artículo 142 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, puesto que, éste resulta un modelo idóneo para promover la especialización y, además, es acorde con el número de diputaciones que integran el Congreso del Estado. Del mismo modo, se le otorgan a la citada Comisión, atribuciones para conocer y opinar, acerca de los proyectos de manuales de organización y procedimientos, del programa anual de auditorías, y del

plan estratégico del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, así como de sus modificaciones. Finalmente, en la Ley de Fiscalización Superior del Estado, se establece como atribución de la Comisión, recibir el Informe General, los informes individuales, y los informes específicos que le presente el Instituto de Fiscalización Superior, con la finalidad de revisarlos, analizarlos y remitirlos a la Directiva junto con el dictamen que determine si la función de fiscalización se realizó con apego a las disposiciones constitucionales, legales y normativas aplicables en materia de fiscalización y auditoría.

7. Reformulación del tipo penal del delito de ejercicio ilícito de las funciones públicas, relacionado con la omisión de presentar al Congreso del Estado, la Cuenta Pública. Se modifica la fracción VIII, del artículo 323, del Código Penal del Estado, para precisar que comete el delito de ejercicio ilícito de las funciones públicas, no quien omita presentar la Cuenta Pública de una entidad fiscalizada al Congreso del Estado en el plazo establecido por el artículo 53, de la Constitución local, sino quien teniendo la obligación, omite presentarla.

8. Simplificación del procedimiento para la presentación de la Cuenta Pública por parte de las entidades fiscalizadas y de la presentación del Informe General e Informes Individuales por parte del Instituto de Fiscalización Superior al Congreso del Estado. Con el objeto de disminuir el consumo de recursos materiales y humanos, así como facilitar y agilizar el procedimiento de presentación de la Cuenta Pública por parte de las entidades fiscalizadas, se establece en la Ley de Fiscalización Superior del Estado, que la Cuenta Pública se presentará impresa en original en un solo tanto, acompañada de su archivo electrónico. Con la misma finalidad, se establece en el citado ordenamiento que el Instituto de Fiscalización Superior, entregará el Informe General y los Informes Individuales al Congreso por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización, debiéndolo presentar en formato impreso en original en un solo tanto y acompañado de su archivo electrónico, el cual se distribuirá entre las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión.

9. Precisión de los plazos y las etapas del procedimiento de determinación de acciones derivado de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública. Se establece en la Ley de Fiscalización Superior del Estado, que una vez entregados los Informes Individuales al Congreso, la persona titular del Instituto de Fiscalización Superior notificará a cada entidad fiscalizada, dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha de entrega, el informe que contenga las acciones y recomendaciones que se les hayan realizado, para que, en un plazo de treinta días hábiles contados a partir de la recepción del informe, den contestación a cada una de las observaciones realizadas acompañando la información que consideren pertinente para su solventación. A diferencia de la Ley de Fiscalización vigente, con la notificación del informe a las entidades fiscalizadas quedarán formalmente promovidas y notificadas tanto las acciones como las recomendaciones contenidas en los Informes Individuales que no sean solventables. El Instituto de Fiscalización Superior, en un plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la recepción de la contestación, analizará las constancias y determinará las observaciones que no hayan sido solventadas, para promover o emitir las acciones que dispone el artículo 41. En caso de que la entidad fiscalizada no dé contestación al informe, se tendrán las observaciones como no solventadas. Finalmente, se establece en la Ley de Fiscalización, el procedimiento para la emisión de recomendaciones, en congruencia con las reformas planteadas al artículo 54, párrafo tercero, de la Constitución local.

10. Implementación de la revisión y fiscalización en tiempo real del ejercicio fiscal en curso. La fiscalización en tiempo real es una práctica recomendada internacionalmente para reforzar el combate a la corrupción, ya que, la revisión se hace en el momento que se

están ejecutando las acciones con la finalidad de evitar o corregir problemas en proyectos y programas. En virtud de lo anterior, se establece en el artículo 54 de la Constitución local, ese género de revisión y fiscalización, por lo tanto, se desarrollan sus bases en la Ley de Fiscalización Superior del Estado, Título Tercero denominado "De la Revisión y Fiscalización en Tiempo Real del Ejercicio Fiscal en Curso", en el cual se otorga al Instituto de Fiscalización Superior del Estado, la atribución de revisar y fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos en tiempo real del ejercicio fiscal en curso, respecto de las entidades fiscalizadas que como resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio inmediato anterior, hayan obtenido dictamen negativo. 11. Reestructuración del recurso de reconsideración. En el Título Sexto de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, se establece con claridad que, en contra de las multas impuestas por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado, procede el recurso de reconsideración. Asimismo, dentro de las disposiciones a las cuales se sujetará el recurso, se hace la precisión de que, en caso de no señalar domicilio en los términos prescritos, todas las notificaciones, aún las de carácter personal, se realizarán por lista que se fijará en los estrados del Instituto de Fiscalización Superior, en congruencia con los artículos 42 a 44 del Código Procesal Administrativo para el Estado, de aplicación supletoria a la enunciada Ley de Fiscalización. Además, se establece que, si el escrito de interposición del recurso cumple con todos los requisitos, el Instituto de Fiscalización Superior deberá dictar el acuerdo de admisión del recurso, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la fecha en que lo haya recibido. Por otro lado, se establece como causa de desechamiento del recurso, la omisión de desahogar la prevención que formule el Instituto de Fiscalización Superior cuando no se cumpla con alguno de los requisitos establecidos en la fracción I, del artículo 64, de la Ley de Fiscalización. Finalmente, se reduce a cuarenta y cinco días hábiles el plazo para que el Instituto emita la resolución una vez cerrada la instrucción, así como a quince días hábiles siguientes a su emisión, el plazo para su notificación. 12. Otorgamiento de la cualidad profesional al Servicio Fiscalizador de Carrera. En la Ley de Fiscalización Superior del Estado, se sustituye al Servicio Fiscalizador de Carrera por el Servicio Profesional Fiscalizador de Carrera, al cual se dota de la función de profesionalización, con la finalidad de que las personas servidoras públicas que integren el Instituto de Fiscalización Superior del Estado cumplan un alto estándar de formación profesional que les permita incrementar su productividad, eficiencia y calidad a través de la capacitación. 13. Establecimiento del procedimiento de ratificación de la persona titular del Órgano Interno de Control del Instituto de Fiscalización Superior del Estado. Para dar certeza al procedimiento de ratificación de la persona titular del Órgano Interno de Control, se establecen en la Ley de Fiscalización Superior del Estado, las etapas a las cuales se sujetará dicho procedimiento. La primera fase, parte del derecho de la persona titular a manifestar al Congreso del Estado su intención de ser ratificada, lo que realizará dentro de los sesenta días naturales previos al día de la conclusión del cargo. Posteriormente, la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización, previa revisión del desempeño en el cargo de la persona titular, mediante dictamen propondrá al Pleno la ratificación, o la no ratificación. Cuando el Congreso determine la no ratificación o la persona titular del Órgano Interno de Control omita manifestar al Congreso su intención de ser ratificada, instruirá a la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización para que se proceda a la elección de la citada persona a través del procedimiento ordinario del artículo 97. 14. Fortalecimiento de las atribuciones del Órgano Interno de Control del Instituto de Fiscalización Superior del Estado y extinción de la Unidad de Evaluación y Control. Con la finalidad de maximizar el marco de acción del Órgano Interno de Control

y dar cabida a verdaderos mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas que sean congruentes con lo previsto en Título Décimo Tercero de la Constitución Política del Estado, se establecen en la Ley de Fiscalización Superior de la Entidad, las siguientes atribuciones a cargo del citado Órgano: a) Formular, con base en los resultados de sus auditorías, las observaciones y recomendaciones que de estas se deriven; y establecer el seguimiento sistemático para el cumplimiento de las mismas; b) Revisar el ejercicio del gasto y su congruencia con el presupuesto de egresos del Instituto de Fiscalización Superior; c) Recibir denuncias por hechos probablemente constitutivos de faltas administrativas de los servidores públicos del Instituto de Fiscalización Superior o de particulares, por conductas sancionables en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí y turnarlas a la autoridad investigadora para el inicio de las investigaciones correspondientes; d) Iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa, cuando se traten de actos u omisiones que hayan sido calificados como faltas administrativas no graves en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; e) Iniciar, substanciar y remitir al Tribunal, los autos originales del expediente para la continuación del procedimiento y su resolución por dicho Tribunal, cuando se trate de faltas administrativas graves o de particulares por conductas sancionables en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; y f) Conocer y resolver el recurso que interpongan los servidores públicos sancionados por faltas no graves, conforme lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí y dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales; g) Supervisar que los procedimientos de contratación pública que lleve a cabo el Instituto de Fiscalización Superior; se realicen en términos de las disposiciones en la materia; Por otra parte, se propone la extinción de la Unidad de Evaluación y Control, considerando que la Comisión de Vigilancia es el órgano de trabajo parlamentario del Congreso del Estado, responsable primordialmente de dar seguimiento a las acciones de fiscalización que realiza la Entidad de Fiscalización Superior del Estado, así como evaluar su desempeño. Para cumplir con dicho objetivo, la Ley en todo tiempo ha previsto que esta Comisión legislativa contará con servicios de apoyo técnico y asesoría que le autorice la Junta de Coordinación Política; de ello dan cuenta los artículos, 118, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la Entidad; y 69, fracción XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado; lo anterior es así, toda vez que, la Comisión de Vigilancia tiene encomendadas funciones técnicas específicas para el debido seguimiento y evaluación de la función de fiscalización superior que ejerce el Congreso del Estado por conducto del Órgano Técnico, lo que marca la diferencia con el resto de las comisiones permanentes de dictamen legislativo, las cuales únicamente cuentan con servicios de asesoría en materia legislativa para la creación y modificación de leyes y decretos. Ahora bien, cabe decir que durante los trabajos de la Sexagésima Primera Legislatura de la Entidad, por Decreto Legislativo 602, publicado en el Periódico Oficial del Estado el lunes 10 de abril de 2017, fue expedida la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí, que abrogó la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 30 de mayo de 2006. Fue a través de dicho Decreto que se creó la Unidad de Evaluación y Control como un órgano de apoyo de la Comisión de Vigilancia. Posteriormente, mediante Decreto Legislativo 976, publicado en el Periódico Oficial del Estado el lunes

11 de junio de 2018, fue expedida la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí, que abrogó la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, publicada en el Periódico Oficial del Estado el lunes 10 de abril de 2017, por Decreto Legislativo 602. Fue entonces a través de dicho Decreto que se extinguió la Contraloría Interna de la Auditoría Superior del Estado, para asignarse sus atribuciones a la Unidad de Evaluación y Control, constituyéndose así dicha Unidad de Evaluación, independientemente de sus funciones de apoyo de la Comisión de Vigilancia, como órgano interno de control de la Auditoría Superior del Estado. Finalmente, por Decreto Legislativo 588, publicado en el Periódico Oficial del Estado el jueves 27 de febrero de 2020, fueron reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí, con el objeto, por una parte, que la Auditoría Superior del Estado contará dentro de su estructura orgánica con su propio Órgano Interno de Control, y por otra parte, con la finalidad de circunscribir la actuación de la Unidad de Evaluación y Control, al ámbito de exclusivamente de las responsabilidades que la Ley encarga a la Comisión de Vigilancia. Aquí es importante precisar que, derivado de un deficiente estudio y análisis desde su origen, la Unidad de Evaluación y Control –UEC-, hasta antes de la reforma del 27 de febrero de 2020, fue concebida por sus creadores como una instancia con facultades supraleales, esto es, con mayores atribuciones que las asignadas a la misma Comisión de Vigilancia de la cual depende, pues a diferencia de esta última, la denominada UEC ostentaba atribuciones con el carácter de órgano interno de control en relación con la Auditoría Superior del Estado, que la Comisión de Vigilancia no tenía; por lo tanto la UEC dependía de la Comisión de Vigilancia solo en cuanto a sus funciones como órgano auxiliar de apoyo, no así en su carácter de Órgano Interno de Control; de ahí que se deba considerar como un acierto de la Legislatura en turno, la reforma de 2020 que dotó a la Auditoría Superior del Estado de su propio Órgano Interno de Control, y que acotó atribuciones de la UEC que resultaban excesivas. No obstante lo anterior, podemos afirmar que la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia fue introducida en la legislación local de manera deficiente, ya que fue el resultado tan solo de una reproducción de las disposiciones que en materia federal le son aplicables a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y a sus Comisiones de Vigilancia; y de Presupuesto y Cuenta Pública, en relación con la función de fiscalización superior que ejerce a través de la Auditoría Superior de la Federación, lo que debemos considerar como un yerro; esto es así, en razón de que en ningún tiempo el Congreso del Estado advirtió sobre las necesidades presupuestales para la creación de la nueva Unidad de Evaluación y Control que resultó por demás robusta en su integración, además de que tampoco se advirtió sobre las marcadas diferencias existentes entre los procesos que se llevan a cabo tanto en la Cámara Federal como en la Legislatura local respecto al análisis y dictaminación de los informes finales de auditoría de la Cuenta Pública. En este punto no debemos perder de vista que, desde su creación, se estableció que la Unidad de Evaluación y Control estaría integrada al menos por 3 direcciones, 1 secretaría técnica, y 1 coordinación, conforme a lo siguiente: Una Dirección de Análisis de la Fiscalización Superior del Estado; Una Dirección de Evaluación del Desempeño y Apoyo en las Funciones de Contraloría; Una Dirección Jurídica; Una Secretaría Técnica, y Una Coordinación de Planeación Estratégica, todo esto de conformidad con lo estipulado por el artículo 11 del vigente Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado. No obstante lo anterior, es una realidad que desde su origen y hasta el día de hoy, en ningún tiempo la UEC ha sido conformada en los

términos prescritos en la reglamentación interna derivado de su notoria inviabilidad presupuestal, por lo que, a cinco años de su creación el Congreso del Estado solo ha presupuestado en cada ejercicio fiscal de manera ineludible, el salario correspondiente a la persona titular de la UEC, esto en razón de que en términos del artículo 92 de la Ley de Fiscalización de la Entidad, su titular dura en el encargo un periodo de cuatro años. En ese orden de ideas debemos dejar establecido que, esta Soberanía al crear en 2017 la UEC, dejó de observar lo dispuesto por los artículos, 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y 19 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, al no haber realizado una evaluación del impacto presupuestario, derivado del aumento de gasto tras la creación de la nueva unidad administrativa. De todo lo expuesto y fundado podemos concluir que, a esta Legislatura le fue heredado un órgano de apoyo disfuncional por su deficiente integración y por demás caro de acuerdo a su estructura orgánica; de ahí que resulte necesario emprender acciones inmediatas para corregir el rumbo y dotar sí, a la Comisión de Vigilancia, de servicios de asesoría técnica en materia de fiscalización, pero acordes a la realidad y disponibilidad presupuestaria del Congreso del Estado. Por lo tanto, prevalecen en los ordinales 118, fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la Entidad y 68, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado propuesta, las atribuciones de la Comisión de Vigilancia que refieren que dicho órgano colegiado contará con los servicios de asesoría y apoyo técnico en materia de fiscalización que apruebe la Junta de Coordinación Política.

15. Criterios para la imposición de multas por parte del Instituto de Fiscalización Superior del Estado. Con la finalidad de que el Instituto de Fiscalización Superior del Estado esté en posibilidad de determinar el monto de las multas de forma más objetiva, se adicionan los criterios de: grado de escolaridad y reincidencia, así como el supuesto en el cual se actualiza ésta última. Por otra parte, se adiciona la forma en la cual se determinarán las condiciones económicas de la persona infractora, lo que proporcionará parámetros concretos al citado Instituto para individualizar las sanciones.

16. Actualizaciones normativas, ajustes de técnica y uso de lenguaje incluyente. Se modifican diversas referencias que se encontraban desactualizadas de acuerdo con los ordenamientos vigentes, tales como:

- a) Las referencias que establece tanto el texto constitucional como el de la Ley de Fiscalización local, al Título Décimo Segundo de la Constitución Política del Estado, el cual derivado de las reformas en materia anticorrupción publicadas en el medio de comunicación oficial del Estado, el 02 de octubre de 2017, pasó a ser el Título Décimo Tercero denominado "De las Responsabilidades, Juicio Político y Anticorrupción".
- b) La relativa a la atribución de la Entidad de Fiscalización Superior del Estado establecida en la Ley de Fiscalización de la Entidad, de conocer y resolver sobre el recurso de revocación, medio de impugnación inexistente, ya que, su denominación correcta es "recurso de reconsideración".
- c) Asimismo, se homologa la definición de "contralorías" conforme a lo estipulado en el artículo 3º, fracción VIII, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.
- d) La concerniente a la atribución de la Entidad de Fiscalización Superior del Estado, de coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, la cual se modifica para establecer la denominación de "procedimiento penal" de acuerdo con lo regulado en el artículo 211, del Código Nacional de Procedimientos Penales.
- e) La adición de las faltas de particulares en el capítulo relativo a la prescripción de responsabilidades, en congruencia, con la reforma al artículo 73, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, publicada en el Periódico

Oficial del Estado "Plan de San Luis", el 07 de marzo de 2022. f) La relativa a la atribución de la persona titular de la Entidad de Fiscalización Superior del Estado, para presentar el recurso de revisión administrativa respecto de las resoluciones que emita el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, la cual se modifica para hacer alusión al recurso de apelación en apego a lo establecido en los artículos 217 a 221, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. Finalmente, en el texto constitucional y ordenamientos secundarios, se hace uso del lenguaje incluyente en cumplimiento a lo estipulado en los artículos, 1º, 4º, y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés).

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos, 53, 54, 57 en su fracción XII, 124 BIS en su fracción I, 125 en su fracción III los párrafos segundo, y tercero, y 135 en sus párrafos, segundo, y quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, para quedar como sigue **ARTÍCULO 53.** En el primer período ordinario de sesiones, el Congreso del Estado se ocupará de preferencia de aprobar las leyes de ingresos del Estado y las de los municipios, así como de examinar y aprobar el presupuesto de egresos que le presente el Ejecutivo, correspondiente al año entrante. En el segundo periodo, el Congreso del Estado se ocupará de la revisión y análisis del informe general e informes individuales que le presente el Instituto de Fiscalización Superior del Estado como resultado de la fiscalización de las cuentas públicas de las entidades fiscalizadas, con el objeto de evaluar el ejercicio de la función de fiscalización superior, en los términos que disponga la ley de la materia. De igual forma se ocupará del inicio de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas de los poderes del Estado; de los municipios y de sus organismos descentralizados; de los organismos autónomos; y demás entidades auditables, relativas al año próximo anterior, para lo cual contará con el apoyo del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, de conformidad con el procedimiento que establezca la ley de la materia. La Cuenta Pública de, los poderes, Ejecutivo, Legislativo, y Judicial; de los organismos constitucionales autónomos; de los municipios; de las entidades y organismos de las administraciones públicas, paraestatal y paramunicipal; y demás entidades fiscalizadas que establezca la Ley de la materia, se entregará para su revisión y fiscalización en forma anual al Congreso del Estado y, en sus recesos, a la Diputación Permanente, a más tardar el último día del mes de febrero del año siguiente al de su ejercicio, previo conocimiento cuando así corresponda, de sus órganos de gobierno, o equivalentes; con independencia de que sean o no aprobadas por éstos. Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior, rendirán un informe trimestral de su situación financiera, a más tardar el día quince del mes siguiente al periodo de que se trate, conforme a lo que disponga la ley.

ARTÍCULO 54. Corresponde al Congreso del Estado a través del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, la revisión y fiscalización de las cuentas públicas de las entidades fiscalizadas, con el objeto de evaluar los resultados de su gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en los presupuestos de egresos y demás disposiciones legales aplicables, y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. Si de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha autoridad sólo podrá emitir las

recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos que disponga la Ley. El Instituto de Fiscalización Superior del Estado revisará y fiscalizará la cuenta pública de manera posterior al término de cada ejercicio fiscal, salvo la revisión y fiscalización que realice en tiempo real del ejercicio fiscal en curso, conforme a los supuestos que prevea la ley de la materia. El Instituto de Fiscalización Superior del Estado tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley. La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, imparcialidad, confiabilidad y definitividad. El Congreso del Estado a través del Instituto de Fiscalización Superior del Estado concluirá la revisión de las cuentas públicas a más tardar el último día del mes de noviembre del año de su presentación y entregará el Informe General y los informes individuales que contengan los resultados de las revisiones y auditorías practicadas, en los términos que establezca la ley de la materia. La ley dispondrá lo necesario para que el Instituto de Fiscalización Superior del Estado tenga y ejerza las siguientes atribuciones: I. Determinar daños y perjuicios; II. Promover acciones y responsabilidades, incluidas las referidas en el Título Décimo Tercero de esta Constitución, ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción, o ante las autoridades que competa, y III. Presentar denuncias y querellas. El Instituto de Fiscalización Superior del Estado debe guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes a que se refiere este artículo; la ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición. La titularidad del Instituto de Fiscalización Superior del Estado recaerá en una persona que se denominará Auditora o Auditor Superior, durará en su cargo nueve años, y será nombrada por el Congreso del Estado por el voto de cuando menos las dos terceras partes de sus miembros presentes en la sesión que corresponda. La ley determinará el procedimiento para su nombramiento. Para ser titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado se requiere contar con experiencia al menos de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades, y cumplir además con los requisitos previstos en las fracciones, I y IV, del artículo 99, de esta Constitución, y los que al efecto señale la ley. ARTÍCULO 57. ... I a XI. ...XII. Expedir las leyes que regulen la organización y facultades del Instituto de Fiscalización Superior del Estado; así como revisar y examinar, y, en su caso, señalar las irregularidades en las cuentas y actos relativos a la administración, inversión y aplicación de fondos públicos del Estado, de los municipios y sus entidades, así como de los organismos constitucionales autónomos, y proceder en los términos de ley; XIII a XLVIII. ...ARTÍCULO 124 BIS. ... I. El Sistema contará con un Comité Coordinador integrado por los titulares del Instituto de Fiscalización Superior del Estado; de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción; del órgano interno de Control del Gobierno del Estado; por el Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; y el Presidente del Organismo Garante que establece el artículo 17 fracción III de esta Constitución; así como por un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, y otro del Comité de Participación Ciudadana, y II. ... ARTÍCULO 125. ...I y II. ... III. ... Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado y los órganos internos de control, o por sus homólogos en los municipios, según corresponda; y serán sancionadas por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán del conocimiento y sancionadas por los órganos internos de control. Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades

administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado, se observará lo previsto en el artículo 90 de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones del Instituto de Fiscalización Superior del Estado en materia de fiscalización, sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos. ... IV. ... ARTÍCULO 135. ... El Instituto de Fiscalización Superior del Estado, y las contralorías de los poderes, Legislativo, Ejecutivo, y Judicial, así como de los ayuntamientos, y de los organismos constitucionales autónomos, en el ámbito de sus competencias, vigilarán el estricto cumplimiento de esta disposición, y evaluarán el ejercicio de los recursos económicos, con el fin de propiciar que éstos se incluyan en los respectivos presupuestos. Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del Título Décimo Tercero de esta Constitución. TRANSITORIOS. PRIMERO. Una vez aprobado el presente Decreto por los ayuntamientos de la Entidad conforme a lo establecido en el artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, será vigente al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de Estado "Plan de San Luis". SEGUNDO. En tanto se armonizan las leyes secundarias conforme a lo establecido en este Decreto, las referencias que hagan a la Auditoría Superior del Estado se entenderán hechas al Instituto de Fiscalización Superior del Estado. Lo tendrá entendido el Ejecutivo del Estado, lo hará publicar, circular y obedecer. D A D O en el salón de sesiones "Ponciano Arriaga Leija" del Honorable Congreso del Estado, en Sesión Extraordinaria, el veinticuatro de agosto del dos mil veintitrés. Honorable Congreso del Estado. Por la Directiva. Primera Secretaria: Legisladora Liliana Guadalupe Flores Almazán. Presidenta: Legisladora Cinthia Verónica Segovia Colunga. Segunda Secretaria: Legisladora María Claudia Tristán Alvarado. Al concluir su lectura se puso a consideración y al no haber intervenciones, se sometió a votación la Minuta Proyecto de Decreto de referencia, y resultaron 14 catorce votos a favor; 1 uno en contra, o cero abstenciones, de los 15 quince miembros presentes en el acto; declarándose aprobada por: **MAYORÍA** en todos sus términos y para los efectos de la parte relativa de los párrafos, primero, y segundo, del artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

6.- Punto seis del orden del día relativo a los **ASUNTOS GENERALES**, como **asunto general número uno** interviene la **Regidora Francisca del Sagrario Rojas Mendoza** para decir que trae un aviso precisamente del tema de salud que por parte de la jurisdicción sanitaria no. II nos solicitan que el Municipio nos sumemos a los trabajos de descarcharización y de deshierbar con la finalidad de prevenir en el tema del dengue, como todos conocemos es una enfermedad transmitida por el mosquito y debido a que hay casos muy probables en la Ciudad por lo tanto se trata de sumarnos tanto la sociedad como el Municipio y los servicios de salud, y ante esta alerta ya ambos Departamentos están informados, como es Ecología y Servicios Primarios quienes accedieron a dicha petición y a partir del día de mañana van a empezar a trabajar en la zona que ya nos avisaron que ya hay un probable caso de dengue en la Ciudad, y sobre todo el fin de este aviso es que los ciudadanos tengan la concientización y que trabajen en las acciones que pide Jurisdicción Sanitarias las cuales son el lava, tapa, voltea y tira, y esto se refiere a los recipientes que a veces se tienen con agua, los toneles,

tinias, llantas, etc., entonces que estén informados que la Administración y el Municipio ya está tomando cartas en el asunto y nada más que se le invite a la ciudadanía que tome conciencia y haga lo suyo en cuanto a hacer estas acciones, nada más repetirles que estén conscientes de que en caso de presentar alguno de los síntomas de esta enfermedad acudan inmediatamente a la revisión médica, les recordamos que dentro de los síntomas es la fiebre alta, el salpullido, dolor muscular y articular, y en casos graves se habla de una hemorragia profunda que puede llevar al shock e incluso hasta la muerte.

Como asunto general número dos hace uso de la voz el **Regidor Alejandro Martínez Luna** para referir que entre semana se les hizo llegar a algunos de los integrantes del Cabildo al Departamento de Regidores, una carta por parte del Dip. Federal José Alejandro Segovia Hernández, mismo que refería a una situación con el tema de parquímetros con muchas y múltiples quejas de las que somos conscientes, el tema no es ver quién es o no responsable de lo que se señala en dicha carta, sino más bien apelar a una buena revisión de cuentas y que el Oficial Mayor y el Tesorero nos pudieran dar cuenta de los ingresos y cómo hemos apoyado con estos ingresos a disminuir la deuda que se tiene con la Empresa Iberparking, algunos de nosotros teníamos ya los convenios que signan esta deuda que es de cerca de 47 millones de pesos y además proponer a este Cabildo que nos pudieran apoyar todos para que el Tesorero y el Oficial Mayor nos rindan un poquito esa deuda de cómo vamos y como hemos disminuido todos juntos esa deuda, me gustaría proponer a este pleno y es pertinente que el Tesorero y el Oficial Mayo nos rindan una cuenta, pues además quedamos de que íbamos a trabajar el tema de los contratos y no se han revisado y sigue parado, no se ha hecho la Mesa de trabajo que se había quedado en esta Mesa de trabajo, yo recupere los archivos y en la semana se los haré llegar, encontramos los contratos con la Empresa, interviene el **Lic. Raúl Ortega Rodríguez** para decir que como menciona el Regidor está pendiente el análisis del Contrato, o de lo que se pudo hacer llegar por la falta de documentación en la entrega-recepción, entonces lo viable es primero hacer es llamarles a la Mesa ya con la información que se tenga y posteriormente que cada regidor o integrante de Cabildo pueda hacer la propuesta correspondiente, en ello pueda ir cualquier información o informe que tengan que dar las áreas correspondientes, ya se la Oficialía, la Tesorería o cualquier otra, pero partiendo de esa información, ahorita ninguno ha hecho el análisis de esos documentos, el **Regidor Alejandro Martínez Luna** pregunta cuándo se podrá tener esa fecha, él puede hacer llegar los documentos a más tardar el día lunes a la oficina de los Regidores, a los Síndicos y a la oficina del Alcalde, el **Lic. Raúl Ortega Rodríguez** menciona que nosotros la generamos, en cuanto se tenga, el otro día se mencionó de alguna documentación que existe y otra que no y que hizo falta en el proceso de entrega recepción, pero apenas se tenga podemos hacer la planeación de la reunión, ahorita estamos inmersos, todo el Ayuntamiento y se los comento porque es parte de la dinámica del

Ayuntamiento, estamos inmersos en un desahogo de observaciones de la Auditoría y ha sido algo pesado porque a todos los Departamentos se les ha estado pidiendo información y en el caso particular de la Secretaría General del Ayuntamiento nos toca hacer las certificaciones correspondientes de todos los Departamentos, entonces sí se ha acrecentado el trabajo aunado al trabajo ordinaria de la propia administración, pero en cuanto se tengan los documentos y se vaya saliendo de la Auditoría y de la contestación de las observaciones que ya es próxima, inmediatamente se cita, también para tener la libertad de que si podemos invitar a unos funcionarios también estén en esa disposición, porque ahorita sí están atendiendo esas observaciones, toma la palabra el **Ing. Iván Noé Estrada Guzmán, Presidente Municipal**, y comenta que quiere añadir algo a lo que refiere el Lic. Raúl, quiere que sea lo más pronto, si tú los tienes ya completos nos lo hagas llegar el Contrato para empezarlo a checar, me gustaría que se hiciera esa Mesa de trabajo y me gustaría acercar al Representante de los parquímetros, porque yo me he sentado con él y sí está crítico, y mejor los que le saben a las leyes sepan los términos en los que nos dejaron amarrados, yo no lo tengo completo, nos dan a cuentas gotas el Contrato, nos dan nada más partes del Contrato y si tú lo rescataste ya completo qué bien, para sentarnos y después de eso con los abogados de aquí hacer un análisis y sentar al representante de Iberparking o no sé cómo se llama la Empresa nueva, para que él nos explique también los términos en los que quedó dicho Contrato, y a qué estamos obligados al decir no, o a qué estamos obligados al decir sí, porque a lo mejor el decir no nos puede causar problemas más grandes de los que tenemos ahorita, entonces sí me gustaría que nos lo hicieras llegar lo más rápido posible para empezarlo a checar, la semana que entra que bien dicen están en el proceso de desahogo de observaciones pero yo creo que a mitad de la semana estaremos un poco más despejados de eso, hace uso de la voz el **Regidor José Mario Hernández García** para preguntar si a los documentos que tú te refieres es al Contrato completo, porque yo tengo una versión y son 7 hojas nada más, el **Regidor Alejandro Martínez Luna** menciona que ese es el nuevo Convenio que se firmó en la Administración pasada, pero existe un Contrato de origen que es el que nos obligó con la Empresa que Iberparking adquiere la deuda, y es la otra Empresa Estacionamientos S.A. de C.V. que era la Empresa operadora original de los parquímetros, con quien firma la Administración 2009-2012, y es Iberparking quien adquiere esta deuda, al nosotros decirle que no a Iberparking o negarnos a cumplir el contrato, se nos obligará a liquidar la deuda total como Ayuntamiento, que es claramente lo que dice el Convenio, pero habrá que ver también a cuanto de este convenio hemos aportado, porque la recaudación es bastante, y cuánto nos entra a nosotros como Municipio, aquí no vemos ni un peso de esos parquímetros pero si se está pagando esa deuda con esa recaudación ver cuánto ya no debemos para terminar de liquidar y que puedan estos ingresos ser de beneficio a los matehualenses, el **Ing. Iván Noé Estrada Guzmán** dice que les comentará rápido cómo funcionaba, se recaudaba, lo único que gastamos nosotros es al personal y tránsitos porque cómo le vamos a estar

trabajando a una empresa que ahorita que metieron lo de las tarjetas es directamente a ellos, porque antes llegaba a la Tesorería, la Tesorería contaba si eran 20 pesos, llegaba gente de Iberparking y se les daba un cheque por los 20 pesos, como quien dice nosotros trabajábamos para ellos, ahorita es lo mismo pero ahorita ya no tenemos los tránsitos ahí ni los de tesorería, directamente hay una persona que está en los ingresos mes con mes está enlazado a la plataforma, y día con día hacen un pago a la plataforma y se refleja directamente aquí al Municipio, el control lo tienen allá abajo, pero de hecho las 7 hojas que les pasaron las estuve checando y ahí dice sobre el cobro de las multas, y lo que tú dices que si no, nosotros estamos obligados a pagar si no hay embargos o lo que diga la Ley, pero ahí también dice bien claro con letras negras, que todo lo que se recaude en multas y todo irá directamente al pago de la deuda de los 47 millones de pesos y fracción, lo dice muy claro, el Convenio que nos dejaron y que nadie de los que estamos aquí lo firmó fue que la Administración pasada les llegaron dos millones de pesos diferidos, dos años sí y uno no, a nosotros solo nos va a llegar un año, porque nos tocó el primer año no, el segundo sí que todavía no lo pagan y tercer año no, a la siguiente administración si le llegaran dos millones, fue el acuerdo que ahí viene, y no es nada del porque entra o no entra, o sea antes lo que hacíamos nosotros era trabajar para esta Empresa, nosotros teníamos gente de contabilidad, gente de tránsitos, y fue lo que yo hice, quitarles este personal, llegamos al acuerdo de meter el aparato ese, y al final de cuentas está en plataforma a mí me están mandando los registros pero ahí está, ahí dice que todo es a capital de la deuda, la **Regidora María del Carmen Vázquez Salinas** refiere que es un poco contradictorio lo que nos solicita el Diputado, porque para empezar él sabe bien cómo estuvieron los convenios, él los hizo y los firmó y demás, él aquí nos está haciendo la solicitud de informar hacia dónde van las multas que se están generando, pero ahí está claro que se van directamente a deuda no entiendo, él sabe perfectamente cómo está manejando, aquí nada más él se preocupa de qué estamos haciendo con las multas y lo que se cobra, el **Ing. Iván Noé Estrada Guzmán** dice que hablamos de un convenio que se hizo con la Administración pasada, que no hicimos nosotros, no estoy hablando de funcionarios, estoy hablando de una administración, y el contrato fue responsabilidad de ellos por 15 años, el **Regidor Alejandro Martínez Luna** menciona que es porque hubo una sentencia que fue ejecutada durante el período 2012-2015, el **Ing. Iván Noé Estrada Guzmán** manifiesta que cómo haya sido en su momento, nosotros no hicimos un Contrato, para que nos estén preguntando por algo que nosotros no hicimos, lo único que se me ha ocurrido es que como cambió la forma de pago, que se quitó los tránsitos y a la gente de tesorería que se tenía antes pagados por el Municipio haciendo la chamba que tenía que hacer parquímetros, es lo único que cambió, no ha cambiado nada más, también hay vienen las cuotas que se iban a cobrar, ahora vienen a decir que nosotros, nada más están actualizando y haciendo lo que les toca en la Ley a ellos, ahí dice muy claro si nosotros nos oponemos a algo, nos van a cobrar, porque fue una mentira, había tres demandas, primero nos dijeron que iban a

cerrar dos demandas y quedar solo una con el Contrato que hicieron, y es una mentira, por eso quiero que venga el de parquímetros para que les explique de las tres demandas que están abiertas y si no nosotros incumplíamos en algo acercarnos, o sea no se cerró ninguna demanda, las demandas siguen para ejecutarlas el día que nosotros no cumplamos con lo que la administración pasada se comprometió, el **Regidor Alejandro Martínez Luna** señala que habría que remitirnos al problema origen, y el problema origen es que en la zona centro no son necesarios esos parquímetros y se dejaron desde la administración 2009-2012, habría que revisar cómo podemos encontrar una salida a este convenio, y ver también cuánto hemos pagado ya de esta deuda que se le rinda cuentas no a este Cabildo sino a los matehualenses de cuánto se ha ido pagando con esta recaudación, día a día, y de la cual a esta administración no le ha tocado ni un peso, interviene el **Presidente Municipal** y señala que ni a la otra le tocó nada más que los dos millones, a esta solo le va a tocar un millón de pesos, todavía no lo pagan pues todavía no se acaba el año, este problema no es de ahorita es de años, hay que sentarnos y ver con personas jurídicas que le sepan al tema, para empezar a ver qué se puede hacer, y si agarrar un pleito que no es de nosotros nos va a causar problemas y se va a obligar a pagar porque nosotros incumplir un contrato, que repito nosotros no lo hicimos, si lo hicieron bien o mal en la pasada administración no lo sé, si hicieron bien los términos o la negociación tampoco lo sé, pero yo creo que lo principal es sentarnos y de ahí partimos con la información que se tenga, desgraciadamente es muy poca la información que hay, no nos dejaron nada y desconozco porqué, el **Regidor Juan Ramón Sánchez Velázquez** refiere que si de eso no está entrando para el Municipio nada no podríamos nosotros como Cabildo solicitar por ejemplo las multas disminuirlas un poco, el **Presidente Municipal** señala que hay que verlo, yo te puedo pasar un análisis y un resumen que me pasó el de parquímetros, donde ahí viene lo estipulado en el Contrato, cuánto es el monto de las multas, para que sepas cuánto es, ellos solo están aplicando lo que en su momento acordaron en el Contrato, por eso hay que analizarlo, nosotros no podemos estar encima de un Contrato porque te vuelvo a repetir, si el Contrato nos dejaron mala o mañosamente dejaron las 3 demandas abiertas, para que al momento de que nosotros incurramos paguemos o nos embargan, desgraciadamente tenían la facultad de hacerlo, lo hizo la administración pasada por 15 años, se concesionó a Matehuala en términos que lo desconozco pues nos lo pasan a pedazos el Contrato, entonces yo creo es muy importante y es muy responsable el analizar con gente que le sepa no con lo que nos digan los pajaritos, si no con quien le sepa si está o no dentro de la Ley, si nosotros rescindimos o incumplimos, qué nos pasa, porque a lo mejor por agarrar una agenda de otra persona vamos a caer en meter a Matehuala en una bronca más grande que la que ya tiene, verlo con abogados o con quien le sepa a un tema de estos, creo que eso sería lo más responsable de parte de todos los que estamos aquí, el **Regidor Juan Ramón Sánchez Velázquez** manifiesta que es importante el acercamiento que refiere el Presidente, y que sea con el área jurídica y que pueda ser también Cabildo sería excelente, el **Ing. Iván Noé**

Estrada Guzmán dice que sería Cabildo con el área jurídica, pero primero que pasen lo que tengan ustedes, que jurídico lo chequen cómo lo ven ellos, ahora sí sentarnos con Cabildo, y ya de ahí acercar al responsable de parquímetros y de ahí tomar una decisión, pero sí hay que ser responsables por que en verdad tomar una decisión a la ligera porque a una persona se le ocurre y nosotros encuendarnos con eso, nos puede acarrear más broncas, o le podemos acarrear más broncas al Municipio, yo nada más les pido eso, ser responsables si vamos a tomar una decisión así que sea en una Mesa y con gente que le conozca y que nos pueda decir qué puede pasar, entonces la semana que entra nos haces llegar lo que tengas o que tengamos y se lo hacemos llegar a los abogados y que le empiecen a dar una checadita.

Concluyendo así los asuntos generales.

7.- Punto siete y agotados los puntos que fueron del orden del día, establecidos para esta **Cuadragésimo quinta ordinaria de Cabildo**, el **Ing. Iván Noé Estrada Guzmán, Presidente Municipal**, hace uso de la voz para decir que siendo las 16 horas con 05 minutos del día señalado al inicio del presente instrumento se permite dar por clausurados los trabajos de la presente Sesión en donde todos los acuerdos que aquí se tomaron son válidos por contar con la totalidad de los miembros del Honorable Cabildo.- firmando al calce y margen para constancia de Ley, los que en este intervinieron, supieron y quisieron hacerlo.- conste y damos fe.-